



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE AUDITORÍA : 08 DE OCTUBRE DEL 2020
TIPO DE AUDITORÍA : DE CUMPLIMIENTO
ENTIDAD AUDITADA : CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (CSJ)
CÓDIGO DE LA RESOLUCIÓN : RIA-UAI- 1595-2020
TIPO DE RESPONSABILIDAD : NINGUNA

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. Consejo Superior de la Contraloría General de la República. Managua, doce de noviembre del año dos mil veinte. Las diez y dos minutos de la mañana.

ANTECEDENTES:

A la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se le realizó auditoría de cumplimiento a las operaciones de servicios registrales ordinarios del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, departamento de Matagalpa, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, y para tal efecto la Unidad de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia, emitió el informe de auditoría de cumplimiento de fecha ocho de octubre del año dos mil veinte, con referencia: **PE-002-008-20**. Cita el referido informe que la labor de auditoría, se practicó de acuerdo con las Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua, elaboradas por este órgano superior de control y fiscalización, en lo aplicable a ese tipo de auditoría y sobre la base de lo dispuesto en la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado. Que durante el curso del proceso administrativo de auditoría se dio la garantía y tutela efectiva del debido proceso y se cumplió a cabalidad con las diligencias mínimas del mismo, conforme lo establece la Constitución Política de la República de Nicaragua y la referida ley orgánica de este ente fiscalizador, por lo que se notificó el inicio del proceso administrativo de auditoría a los servidores y ex servidores públicos relacionados con las operaciones y actividades sujetas a revisión, siendo éstos: **Gladys Argentina Castro Flores**, registradora titular; **Nieves Gamaliel Rivera Morraz**, registrador público auxiliar; **Nuria del Carmen Laguna Flores**, contador "A"; **Danelia Miroslawa Fernández Blandón**, **Jessi Carolina Téllez Martínez**, **Zulay de los Ángeles Pérez Benavidez**, **Fátima María Oporta Mendoza**, **Ligia Yolieth García Montenegro**, **Elvis Antonio Zeledón Montenegro**, **Karla Vanessa Blandón Flores**, **Oneyda Sarai Rodríguez Moreno**, todos técnicos registral; **Ana Julia Méndez Centeno**, ex técnico registral; **Noemi Zeledón Rocha**, ex registradora pública auxiliar y **Marla Celena Sáenz Martínez**, ex coordinadora administrativa. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 57 de la precitada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, durante en el transcurso del proceso administrativo de auditoría, se mantuvo comunicación constante con los servidores y ex servidores públicos del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, departamento de Matagalpa. En fecha dos septiembre de dos mil veinte, se dieron a conocer los resultados preliminares de auditoría a los auditados



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

relacionados con las operaciones revisadas quienes expresaron sus comentarios y/o justificaciones, lo cual quedó consignado mediante el Acta Respectiva.

RELACIÓN DE HECHO:

Refiere el informe que los objetivos específicos de la labor de auditoría consistieron en: **1)** Evaluar la efectividad del control interno de los servicios registrales ordinarios. **2)** Evaluar el cumplimiento de las autoridades aplicables a los servicios registrales ordinarios y **3)** Identificar los hallazgos a que hubiera lugar y sus responsables. Luego de aplicar los procedimientos de rigor, los resultados conclusivos fueron acorde con los objetivos de auditoría, de tal forma que: El control interno establecido para las operaciones de servicios registrales ordinarios del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, departamento de Matagalpa, del período objeto de examen fue adecuado y cumplió con las autoridades aplicable vigentes, excepto por los hallazgos de control interno siendo éstos: **1)** Orden de pago No. 364247, no soportada correctamente. **2)** Ausencia de la descripción de puesto de trabajo del registro público auxiliar y **3)** Los servidores públicos del registro, no han presentado su declaración patrimonial.

CONSIDERACIONES DE DERECHO:

La Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, en su artículo 9, numeral 5) establece como atribución a esta entidad de control y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, evaluar los planes y la calidad de las auditorías efectuadas por las Unidades de Auditoría Interna. Adicionalmente, el artículo 43, párrafo tercero de la precitada ley orgánica establece que la auditoría gubernamental será practicada por la Contraloría General de la República, por las Unidades de Auditoría Interna y las Firmas Privadas de Contadores Públicos Independientes, previamente autorizadas. Que en materia de auditoría gubernamental practicada por las Unidades de Auditoría Interna, el artículo 65 de la misma ley orgánica establece que los informes de las Unidades de Auditoría Interna, serán firmados por el auditor interno, y dirigidos a la máxima autoridad de la entidad u organismo, copia de tales informes será enviada simultáneamente a la Contraloría General de la República, para los efectos que a ella corresponden. Establecidas las bases legales para las labores de auditorías ejecutadas por las Unidades de Auditoría Interna de la administración pública y conforme el artículo 95 de la ya mencionada ley orgánica, que confiere la facultad de la Contraloría General de la República de pronunciarse sobre las operaciones o actividades de las entidades y organismos sujetos a esta ley y sus servidores, así como para determinar responsabilidades, caso de haberlas, caducará en diez años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas operaciones o actividades. En el presente caso, el informe de auditoría de cumplimiento objeto de la presente resolución, cumple los presupuestos, requisitos y procedimientos que establece tanto la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República como las Normas de Auditoría Gubernamental. Con respecto a los hallazgos de control interno,



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

corresponde a la misma máxima autoridad de la entidad auditada el deber de implementar las recomendaciones de auditoría, contenidas en el informe de autos conforme el artículo 103, numeral 2) de la ley orgánica de este ente fiscalizador, dado que éstas constituyen el valor agregado de la auditoría gubernamental para fortalecer los sistemas de administración, control interno y gestión institucional. De igual manera les permitirá obtener seguridad en todas las operaciones, lo cual contribuirá a mantener una administración eficaz, eficiente y transparente en la utilización de los recursos de la entidad, así como la confiabilidad en la rendición de cuentas, para lo cual se establecerá un plazo razonable para su implementación de sesenta (60) días para cumplir, debiendo informar a este órgano superior de control, una vez vencido el plazo. Se previene que de persistir en ello en las auditorías recurrentes, se procederá en su oportunidad al establecimiento de las responsabilidades conforme lo estipula el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

POR LO EXPUESTO:

De conformidad con los artículos 9, numerales 1) 12) y 95 de la Ley No. 681, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema de Control de la Administración Pública y Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, los suscritos miembros del Consejo Superior, en uso de las facultades que la ley les confiere, se pronuncian de la siguiente manera:

PRIMERO: Admitir el Informe de Auditoría de Cumplimiento de fecha ocho de octubre del año dos mil veinte: **PE-002-008-20**, emitido por la Unidad de Auditoría Interna de la Corte Suprema de Justicia, derivado del examen a las operaciones de servicios registrales ordinarios del Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Matagalpa, departamento de Matagalpa, por el período del uno de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho.

SEGUNDO: No hay méritos para establecer ningún tipo de responsabilidad a los servidores y ex servidores públicos nominados en los antecedentes de la presente resolución administrativa, por lo que hace a la referida auditoría.

TERCERO: Remítase el informe de auditoría de cumplimiento examinado y la certificación de lo resuelto a la máxima autoridad de la Corte Suprema de Justicia para que instruya el cumplimiento de las recomendaciones de control interno, derivadas de los hallazgos de auditoría para lo cual se establece un plazo razonable no mayor de sesenta (60) días, que iniciará a constarse a partir de la respectiva notificación, debiendo informar sobre sus resultados a esta entidad de control. Se previene que de persistir en ello en las auditorías recurrentes, se procederá en su oportunidad al establecimiento de la responsabilidad conforme lo estipula el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Esta resolución comprende únicamente los documentos analizados y los resultados de la presente auditoría, de tal forma que del examen de otros documentos no tomados en cuenta, podrían derivarse responsabilidades conforme la ley. La presente resolución administrativa está escrita en cuatro (04) folios útiles de papel bond con membrete de la Contraloría General de la República, y fue votada y aprobada por unanimidad de votos en sesión ordinaria número mil doscientos nueve (1,209) de las nueve y treinta minutos de la mañana del día doce de noviembre del año dos mil veinte, por los suscritos miembros del Consejo Superior de la Contraloría General de la República. **Cópiese, notifíquese y publíquese.**

Dra. María José Mejía García
Presidenta del Consejo Superior

Dr. Vicente Chávez Fajardo
Vicepresidente del Consejo Superior

Lic. Marisol Castillo Bellido
Miembro Propietaria del Consejo Superior

Lic. María Dolores Alemán Cardenal
Miembro Propietaria del Consejo Superior